

**No. 43393**

---

**Colombia  
and  
Paraguay**

**Agreement on cooperation for the prevention, control and suppression of money-laundering arising from any illicit activity between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Paraguay. Bogotá, 31 July 1997**

**Entry into force:** *23 November 2000 by notification, in accordance with article XV*

**Authentic texts:** *Spanish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Colombia, 2 January 2007*

---

**Colombie  
et  
Paraguay**

**Accord de coopération pour la prévention, le contrôle et la répression du blanchiment de l'argent provenant de quelque activité illicite entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Paraguay. Bogotá, 31 juillet 1997**

**Entrée en vigueur :** *23 novembre 2000 par notification, conformément à l'article XV*

**Textes authentiques :** *espagnol*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *Colombie, 2 janvier 2007*

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

**ACUERDO DE COOPERACION PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRESION  
DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE CUALQUIER ACTIVIDAD ILICITA  
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE  
LA REPUBLICA DEL PARAGUAY**

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Paraguay, en adelante denominados las Partes,

**CONSCIENTES** que el lavado de activos es una conducta delictiva que por sus características ha adquirido un alcance internacional que requiere la cooperación de los Estados para hacerle frente de manera eficaz ;

**QUE** la naturaleza transnacional de esta actividad exige la adopción de acciones conjuntas de los Estados con el fin de erradicarlas;

**RECONOCIENDO** que una forma efectiva para combatir la criminalidad organizada, consiste en privarla de los rendimientos económicos obtenidos por sus actividades delictivas;

**CONVENCIDOS** de la necesidad de fortalecer la cooperación mutua para combatir el lavado de activos derivado de cualquier conducta ilícita;

**EN OBSERVANCIA** de las normas y principios del derecho internacional, y de las normas constitucionales de cada una de las Partes,

**HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:**

**ARTICULO I**

**DEFINICIONES**

A los fines del presente Acuerdo, se entiende por:

1. **“Información sobre transacciones”** : La información o los registros que lleva una institución financiera, así como los informes que ésta elabore sobre transacciones de fondos en efectivo que excedan la cantidad establecida por la autoridad competente de cada Parte.
2. **“Institución Financiera”** : En la República del Paraguay comprende a todo agente, agencia, sucursal u oficina ubicada en el territorio nacional, de todo banco, negociante en moneda o casas de cambio, cobrador de cheques, corredor o agente de valores u otras instituciones financieras, de conformidad con la Ley No. 417/73 “General de Bancos y Entidades Financieras”; Ley No 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay” y sus reglamentaciones y la Ley No 94/91 “de Mercado de Capitales”.

En la República de Colombia comprende a los establecimientos de crédito -bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial-, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización y organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero.

Para los fines de este Acuerdo, a los actores del mercado público de valores tales como las bolsas, comisionistas de bolsa, comisionistas independientes de valores, administradoras de fondos de inversión, administradoras de depósitos centralizados de valores, calificadoras de valores; así como a las casas de intermediación en la venta de divisas o casas de cambio, a las cooperativas de ahorro y crédito, casinos, casas de juego y azar, personas que se dedican a actividades de comercio exterior, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros, se les aplicará las medidas del presente Acuerdo, así como a las demás que las Partes determinen de común acuerdo.

3. “**Actividad ilícita**” : Toda actividad definida de manera inequívoca por la ley de las Partes como generadora de una sanción penal.
4. “**Bienes**” : Todo activo de cualquier tipo, corporal o incorporeal, mueble o inmueble, tangible o intangible, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
5. “**Producto del delito**” : Todo bien derivado u obtenido directa o indirectamente de la comisión de un delito o el equivalente de tales bienes.
6. “**Medida definitiva**” o “**Decomiso**” : Cualquier medida en firme adoptada por un Tribunal o autoridad competente, que tenga como resultado extinguir el derecho de dominio sobre bienes, productos o instrumentos del delito de lavado de activos.
7. “**Medidas cautelares**” o “**Embargo, secuestro preventivo o incautación de bienes**”: Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes o la custodia o control temporales de bienes, por mandamiento expedido por una autoridad competente.

## ARTICULO II

### ALCANCE DEL ACUERDO

Las Partes se comprometen a establecer un mecanismo de cooperación y asistencia mutua para los siguientes fines :

1. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de las actividades realizadas por las instituciones financieras, tal como se comprenden en el artículo I numeral 2o. del presente Acuerdo.
2. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos realizado a través de la comercialización internacional de bienes, servicios o transferencia de tecnología.
3. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de la movilización física de capitales, desde o hacia sus fronteras territoriales.

### ARTICULO III

#### MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA EL SECTOR FINANCIERO Y BURSATIL

1. Las Partes asegurarán que las instituciones financieras sujetas a sus leyes nacionales, conserven y reporten la información pertinente a cada transacción sometida a control y en especial cualquier transacción sospechosa realizada por alguno de sus clientes.
2. Las Partes alentarán a que las instituciones financieras, de acuerdo con su ordenamiento interno, establezcan mecanismos de conocimiento del cliente y su actividad económica, así como el volumen, frecuencia y características de sus transacciones financieras.
3. Las Partes podrán considerar el establecimiento de redes de información financiera, cuyo objetivo será colaborar con las autoridades encargadas de la investigación de las operaciones del lavado de activos.
4. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos realizados a través del sector financiero.

### ARTICULO IV

#### MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE BIENES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

1. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar que sus habitantes cooperen con las autoridades tanto nacionales como extranjeras, para la prevención del lavado a través de la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de tecnología, desde o hacia el territorio de una de las Partes.
2. Las Partes ejercerán especial control sobre las actividades de los productores y comercializadores de aquellos bienes, servicios y transferencia de tecnología, que puedan ser utilizados para lavar bienes o activos de origen ilícito, desde o hacia el territorio de una de las Partes.
3. Las Partes establecerán los controles necesarios para asegurar que las personas o empresas exportadoras o importadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología desde o hacia el territorio de una de ellas, adopten mecanismos adecuados para conocer a sus clientes, así como para asegurarse de que éstos no realicen los pagos con dineros de origen ilícito.
4. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar que las empresas y personas importadoras o exportadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología desde o hacia el territorio de una de las Partes, reporten de forma inmediata a las autoridades competentes de las Partes, cualquier información que pueda conducir a sospechar que se están usando estas actividades para el lavado de activos.
5. El secreto o reserva comercial, sólo será oponible de conformidad con la legislación interna de cada Parte.

6. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos realizados mediante la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de tecnología.

#### ARTICULO V

##### MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA MOVILIZACIÓN FÍSICA DE CAPITALES

1. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para realizar los controles a la movilización de moneda en efectivo, cheques de viajeros, órdenes de pago y demás medios que puedan ser utilizados para transferir recursos del territorio de una Parte al territorio de la otra.
2. Los controles a que se refiere el presente artículo podrán consistir en constancias documentales que reflejen el movimiento de las especies descritas en el numeral 1 del presente Artículo, cuando su valor exceda a los montos establecidos por la autoridad competente de cada una de las Partes, incluyendo la fecha, el monto, el puerto o punto de entrada, y el nombre y la identificación de la persona o personas que efectúen la respectiva operación.
3. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos provenientes del movimiento físico de capitales.

#### ARTICULO VI

##### AUTORIDADES CENTRALES

1. Cada una de las Partes designará una Autoridad Central encargada de presentar y recibir las solicitudes que constituyen el objeto del presente Acuerdo.
2. A este fin las Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre ellas y remitirán las solicitudes a sus autoridades competentes.

#### ARTICULO VII

##### INTERCAMBIO DE INFORMACION

1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes se facilitarán asistencia para el intercambio ágil y seguro, de información financiera, cambiaria y comercial, a fin de detectar y realizar el seguimiento de presuntas operaciones de lavado.
2. Para tal efecto, se establecerán comunicación directa entre las Autoridades Centrales de cada Estado Parte, a fin de obtener y suministrar dicha información de conformidad con su legislación interna.

3. Cuando la Parte Requirente solicite este tipo de asistencia para efectos de una investigación judicial, las Autoridades Centrales solicitarán cooperación a las Autoridades Competentes a fin de obtener y brindar la información que sea solicitada.

Las Autoridades Competentes serán las autoridades judiciales de ambas Partes.

## ARTICULO VIII

### COOPERACION Y ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA

1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes se prestarán asistencia mutua en el intercambio de pruebas y realización de actuaciones judiciales que puedan utilizarse en las respectivas investigaciones, procesos o enjuiciamientos por el delito de lavado de activos. Dicha asistencia comprenderá, entre otras :
  - a) Localización e identificación de personas y bienes o sus equivalentes.
  - b) Notificación de actos judiciales.
  - c) Remisión de documentos e informaciones sobre las transacciones financieras sometidas a control.
  - d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales.
  - e) Recepción de testimonios y ejecución de peritajes.
  - f) Citación y traslado voluntario de personas en calidad de imputados, testigos o peritos.
  - g) Embargo, secuestro y decomiso de bienes.
  - h) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la Parte Requerida lo permita.
2. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito y deberá contener:
  - a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento judicial.
  - b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada.
  - c) Un breve resumen del asunto que se investiga o enjuicia, adjuntándose el texto de las disposiciones legales pertinentes.
  - d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desee que se practique.
  - e) Término dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida.
  - f) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada, si se conoce, y la relación que dicha persona guarda con la investigación o proceso.

g) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que sea citada para la ejecución de pruebas, si se conoce.

h) La información disponible relativa a las transacciones que constituyen el objeto de la solicitud de asistencia, entre ellas, si se conoce, el número de la cuenta, el nombre del titular, el nombre y la ubicación de la institución financiera participante en la transacción y la fecha en la cual ésta tuvo lugar.

3. Los testigos o peritos de cualquier nacionalidad, que a partir de una citación comparezcan ante las autoridades judiciales de la Parte Requirente, no podrán ser procesados, detenidos ni sometidos a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio de esa Parte por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte Requerida.

Una persona, cualquiera sea su nacionalidad, que exprese su consentimiento por escrito, para comparecer ante las autoridades judiciales de la Parte Requirente con el fin de que responda por hechos que son objeto de un proceso contra él, y que se presente voluntariamente, no podrá ser enjuiciada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de su libertad personal por hechos o condenas anteriores a su partida del territorio de la Parte Requerida, diferente a los que fueron especificados en tal citación.

La garantía prevista en el presente Artículo cesará cuando el testigo o perito o la persona llamada a comparecer, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte Requirente durante quince (15) días consecutivos, una vez que su presencia ya no fuese requerida por las autoridades judiciales, hubiese permanecido en ese territorio o hubiese ingresado nuevamente a él, después de haberlo abandonado.

4. En caso de urgencia y si la legislación de la Parte Requerida lo permite, la solicitud de asistencia podrá hacerse vía facsímil, telex u otro medio equivalente, debiendo remitirse el original dentro del plazo de treinta (30) días.
5. La asistencia se prestará aún cuando el hecho por el cual se procede en la Parte Requirente no sea considerado como delito de Lavado de Activos por la ley de la Parte Requerida.

No obstante, para la ejecución de las inspecciones judiciales, requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes, la asistencia se prestará solamente si la legislación de la Parte Requerida prevé como delito de Lavado de Activos el hecho por el cual se procede en la Parte Requirente.

6. La autoridad competente de la Parte Requerida, podrá aplazar el cumplimiento o condicionar una solicitud de asistencia judicial si considera que obstaculiza alguna investigación o procedimiento judicial en curso en dicho Estado.
7. La Parte Requerida podrá negar la solicitud de asistencia judicial cuando sea contraria a su ordenamiento jurídico, obstaculice una actuación o proceso penal en curso o cuando afecte el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales de éste. Dicha negativa deberá informarse al Estado Requirente mediante escrito motivado.
8. La Parte Requirente no podrá utilizar para ningún fin distinto al declarado en la solicitud de asistencia, pruebas o información obtenidas como resultado de la misma.

9. Los gastos que ocasione la ejecución de una solicitud de asistencia serán sufragados por la Parte Requerida salvo que las Partes acuerden otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que sufragarán los gastos.

#### ARTICULO IX

#### RESERVA BANCARIA

1. Las Partes no podrán invocar el secreto bancario para negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente Acuerdo.
2. Las Partes se comprometen a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario obtenidas en virtud de este Acuerdo, para ningún fin distinto al contenido en la solicitud de asistencia.

#### ARTICULO X

#### MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES

1. La autoridad competente de una Parte, por conducto de las Autoridades Centrales, podrá solicitar la identificación y/o la adopción de medidas cautelares sobre bienes instrumento o producto de un delito, que se encuentren ubicados en el territorio de la otra Parte.

Cuando se trate de la identificación del producto del delito, la Parte Requerida informará acerca del resultado de la búsqueda.

2. Una vez identificado el producto del delito, o cuando se trate del instrumento del delito, a solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida, en la medida en que su legislación interna lo permita adoptará las medidas cautelares correspondientes sobre tales bienes.
3. Un requerimiento efectuado en virtud del numeral anterior deberá incluir:
  - a) Una copia de la medida cautelar;
  - b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;
  - c) Descripción de los bienes respecto de los cuales se pretende efectuar la medida cautelar y su valor comercial y la relación de éstos con la persona contra la que se inició;
  - d) Una estimación de la suma a la que se pretende aplicar la medida cautelar y de los fundamentos del cálculo de la misma.



**ARTICULO XI**

**MEDIDA DE DECOMISO DE BIENES**

Las Partes, de conformidad con su legislación interna, podrán prestarse cooperación en el cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de un hecho ilícito en cualquiera de la Partes.

**ARTICULO XII**

**PROTECCION DE DERECHOS DE TERCEROS**

Lo dispuesto en el presente Acuerdo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

**ARTICULO XIII**

**LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS**

Los documentos provenientes de una de las Partes, que deban ser presentados en el territorio de la otra Parte, que se tramiten por intermedio de las Autoridades Centrales, no requerirán de legalización o cualquier otra formalidad análoga.

**ARTICULO XIV**

**RELACION CON OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS**

El presente Acuerdo no afectará los derechos y compromisos derivados de Acuerdos y Convenios internacionales bilaterales o multilaterales vigentes entre las Partes.

**ARTICULO XV**

**SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DENUNCIA Y ENTRADA EN VIGOR**

1. Cualquier duda que surja de una solicitud será resuelta por consulta entre las Autoridades Centrales.

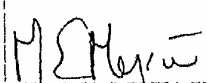
Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta por las Partes por vía diplomática y por los medios de solución de controversias establecidos en el Derecho Internacional.

2. Este Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación a la otra por la vía diplomática. Su vigencia cesará a los seis (6) meses de la fecha de recepción de tal notificación. Las solicitudes de asistencia realizadas dentro de este término, serán atendidas por la Parte Requerida.
3. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción de la última nota diplomática en la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los procedimientos exigidos por sus respectivos ordenamientos constitucionales.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos suscriben el presente Acuerdo.

HECHO en Santafé de Bogotá, a los treinta y un días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete, en dos ejemplares en idioma español, ambos textos igualmente válidos y auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

  
MARIA EMMA MEJÍA VELEZ  
Ministra de Relaciones Exteriores

POR EL GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE PARAGUAY

  
RUBÉN MELGAREJO LANZONI  
Ministro de Relaciones Exteriores

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON COOPERATION FOR THE PREVENTION, CONTROL AND SUPPRESSION OF MONEY-LAUNDERING ARISING FROM ANY ILLICIT ACTIVITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY

The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Paraguay, hereinafter referred to as “the Parties”,

Aware that money-laundering is a criminal activity that has acquired international scope requiring the cooperation of States to combat it effectively,

That the transnational nature of this activity requires joint actions to be taken by States in order to eradicate it,

Recognizing that an effective means of combating organized crime is to deprive it of the economic proceeds of its criminal activities,

Convinced of the need to strengthen mutual cooperation in order to combat the laundering of money derived from all illicit conduct,

In compliance with the norms and principles of international law, and with the constitutional norms of each Party,

Have agreed upon the following:

*Article I. Definitions*

For the purposes of this Agreement:

(1) “Transaction information” shall mean information or records kept and reports prepared by a financial institution on cash transactions in excess of the amount established by the competent authority of each Party.

(2) “Financial institution”, in the Republic of Paraguay, shall mean any agent, agency, branch or office located within its national territory of any bank, currency dealer, cheque casher, securities dealer or other financial institutions, pursuant to General Law No. 417/73 on banks and financial entities, Organic Law No. 489/95 on the Central Bank of Paraguay and the associated regulations, and Law No. 94/91 on capital markets; and

In the Republic of Colombia, shall mean lending institutions (banks, financial corporations, building societies, commercial financing companies), financial services organizations, capital endowment companies and higher-level cooperative financial organizations.

For the purposes of this Agreement, the measures provided for in this Agreement, and any others to be agreed jointly by the Parties, shall apply to public securities market agents such as stockbrokers, independent securities brokers, investment fund administrators, administrators of centralized securities deposit accounts, and securities rating institutions, and also to currency dealers, savings and loan cooperatives, casinos, gambling

and gaming houses, persons involved in foreign trade activities, insurance companies and insurance and reinsurance intermediaries.

(3) “Illicit activity” shall mean any activity defined unequivocally by the law of the Parties as incurring a criminal penalty.

(4) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and the legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets .

(5) “Proceeds of crime ” shall mean any property directly or indirectly derived or obtained from the commission of an offence, or the equivalent of such property.

(6) “Final measure” or “confiscation” shall mean any measure, taken by a court or a competent authority, which terminates the right of ownership over property, proceeds or instruments arising from the offence of money-laundering.

(7) “Precautionary measures ” or “freezing, preventive sequestration or seizure of property” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a competent authority.

#### *Article II. Scope of the Agreement*

The Parties undertake to establish a mechanism for mutual assistance in order to:

(1) Prevent, control and suppress money-laundering through activities carried out by financial institutions as defined in article I (2) of this Agreement;

(2) Prevent, control and suppress money-laundering through international trade in goods and services or technology transfer;

(3) Prevent, control and suppress money-laundering through the physical movement of capital to or from their territorial borders.

#### *Article III. Preventive and Control Measures for the Financial Sector and Stock Exchanges*

(1) The Parties shall ensure that the financial institutions subject to their domestic laws check on all reportable transactions and preserve and provide the information pertaining to them, especially any suspicious transactions engaged in by any of their clients.

(2) The Parties shall encourage financial institutions to establish, in accordance with their internal rules, “know your client” procedures covering clients’ economic activities, including the volume, frequency and characteristics of their financial transactions.

(3) The Parties may consider establishing financial information networks in order to cooperate with the authorities responsible for investigating money-laundering operations.

(4) The Parties shall afford one another the widest measure of technical cooperation on the most effective methods and procedures to prevent, detect, control, investigate and punish acts of money-laundering carried out through the financial sector.

*Article IV. Measures to Prevent and Control International Trade in Goods and Services and Technology Transfer*

(1) The Parties shall take appropriate measures to ensure that their inhabitants cooperate both with national and with foreign authorities in order to prevent money-laundering through international trade in goods and services and technology transfer, to or from the territory of either Party.

(2) The Parties shall exercise special control over the activities of manufacturers of and traders in such goods and services and technology transfer as may be used to launder money or other assets of illicit origin, to or from the territory of either Party.

(3) The Parties shall establish the controls necessary to ensure that persons or companies exporting or importing goods and services and engaging in technology transfer to or from the territory of either Party adopt appropriate “know your client” procedures for preventing their clients from making payments with money of illicit origin.

(4) The Parties shall take appropriate measures to ensure that companies and persons importing or exporting goods and services and engaging in technology transfer to or from the territory of either Party immediately report to the competent authorities of the Parties any information suggesting that the activities in question are being used for money-laundering.

(5) Trade secrecy and confidentiality may be invoked only in accordance with the domestic legislation of each Party.

(6) The Parties shall afford one another the widest measure of technical cooperation on the most effective methods and procedures to prevent, detect, control, investigate and punish acts of money-laundering carried out through international trade in goods and services and technology transfer.

*Article V. Prevention and Control Measures Relating to the Physical Movement of Capital*

(1) The Parties shall take the measures necessary to control the movement of cash and travellers’ cheques, payment orders and other instruments that could be used in the transfer of resources from the territory of one Party to the territory of the other.

(2) The controls referred to in this article may be documentary records of the movement of the items described in paragraph 1 of this article when their value exceeds the amounts established by the competent authority of each Party, including the date, the amount, the port or other point of entry, and the name(s) and other details of the person(s) carrying out the operation in question.

(3) The Parties shall afford one another the widest measure of technical cooperation on the most effective methods and procedures to prevent, detect, control, investigate and punish the laundering of money derived from the physical movement of capital.

*Article VI. Central Authorities*

(1) Each Party shall designate a central authority with responsibility for submitting and receiving the requests which are the subject of this Agreement.

(2) To this end, the central authorities shall communicate between each other directly and shall refer the requests to their competent authorities.

*Article VII. Information Exchange*

(1) In accordance with the terms of this Agreement, the Parties shall afford each other assistance for the prompt and secure exchange of financial, currency market and commercial information in order to detect and track presumed money-laundering operations.

(2) To this end, a direct communication link shall be established between the central authorities of the two Parties in order for such information to be obtained and supplied in accordance with their domestic legislation.

(3) When a Party requests this type of assistance for the purposes of a judicial investigation, the central authorities shall request the cooperation of the competent authorities in obtaining and providing the information requested.

The competent authorities shall be the judicial authorities of the two Parties.

*Article VIII. Cooperation and Mutual Legal Assistance*

(1) In accordance with the terms of this Agreement, the Parties shall afford each other assistance in exchanging evidence and taking legal action that may be helpful in investigations, proceedings or prosecutions relating to the offence of money-laundering. Such assistance shall include:

- (a) Locating and identifying persons and property or its equivalent;
- (b) Serving legal documents;
- (c) Transmitting documents and information concerning reportable financial transactions;
- (d) Conducting house searches and judicial inspections;
- (e) Hearing testimony and making expert appraisals ;
- (f) Summoning witnesses and experts and arranging for their voluntary transfer;
- (g) Seizing, sequestering and confiscating property;
- (h) Providing other forms of assistance as permitted by the legislation of the requested Party.

(2) Requests for legal assistance shall be submitted in writing and shall:

- (a) State the name of the competent authority responsible for the investigation or the legal procedure;
- (b) State the purpose of the request and describe the assistance requested;

- (c) Contain a brief summary of the matter being investigated or prosecuted, together with the text of the relevant legal provisions;
- (d) Give details of and state the grounds for any special procedure that the requesting Party wishes to be applied;
- (e) State the period within which the requesting Party wishes the request to be met;
- (f) State, as appropriate, the identity, nationality and place of residence or domicile of the person to be summoned or notified, if known, and the connection of that person with the investigation or procedure;
- (g) State, as appropriate, the identity, nationality and place of residence or domicile of the person to be summoned to give evidence, if known.
- (h) Contain the available information relating to the transactions which are the subject of the request for assistance, including – if known – account numbers, names of account holders, names and locations of financial institutions involved in the transactions, and dates when the transactions took place.

(3) Witnesses and experts of whatever nationality who appear in response to a summons before the judicial authorities of the requesting Party may not be prosecuted, detained or subjected to any other restriction of their personal liberty within the territory of the requesting Party in respect of acts or convictions that date from before their departure from the territory of the requested Party.

A person of whatever nationality who agrees in writing to appear before the judicial authorities of the requesting Party in order to answer for acts which are the subject of proceedings brought against him/her, and who appears voluntarily, may not be prosecuted, detained or subjected to any other restriction of his/her personal liberty in respect of acts or convictions that date from before his/her departure from the territory of the requested Party and differ from those specified in the summons.

The guarantee provided for in this article shall cease if the witness, expert or other person summoned to appear having had 15 (fifteen) consecutive days in which to leave the territory of the requesting Party once his/her presence is no longer required by the judicial authorities, has remained within the territory of the requesting Party or, having left it, has returned.

(4) In urgent cases, and if permitted by the legislation of the requested Party, a request for assistance may be submitted by fax, telex or an equivalent means of communication, the original being submitted within 30 (thirty) days.

(5) Assistance shall be provided even when the act that is the subject of proceedings within the territory of the requesting Party is not regarded as a money-laundering offence under the law of the requested Party.

However, assistance in the form of judicial inspections, requisitions, searches and precautionary or final measures relating to property shall be provided only if the act that is the subject of proceedings within the territory of the requesting Party is considered to be a money-laundering offence under the law of the requested Party.

(6) The competent authority of the requested Party may delay meeting a request for legal assistance or impose conditions if it considers that meeting the request would otherwise hamper an ongoing investigation or judicial procedure within its territory.

(7) The requested Party may refuse to meet a request for legal assistance if meeting that request would be contrary to its legal system, hamper ongoing criminal proceedings, or be prejudicial to public order, to its sovereignty, to its national security or to essential public interests. The requesting Party shall be informed in writing of the refusal and of the reasons for it.

(8) The requesting Party may not use evidence or information obtained as a result of a request for assistance for any purpose other than that stated in the request.

(9) The costs of meeting a request for assistance shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed by the Parties. If substantial expenditures or expenditures of an extraordinary nature are required in order to meet a request, the Parties shall consult with each other to determine the terms and conditions on which the request will be met and the manner in which the costs will be borne.

#### *Article IX. Bank Secrecy*

(1) The Parties shall not invoke bank secrecy as grounds for refusal to provide mutual legal assistance pursuant to this Agreement.

(2) The Parties undertake not to use any information obtained pursuant to this Agreement that is protected by bank secrecy for any purpose other than that stated in the request for assistance.

#### *Article X. Precautionary Measures relating to Property*

(1) The competent authority of a Party, through the central authorities, may request the identification and/or adoption of precautionary measures relating to property that is the instrument or proceeds of crime located within the territory of the other Party.

When it is a matter of identifying the proceeds of crime, the requested Party shall provide information on the outcome of the search.

(2) Once the proceeds of crime have been identified, or when it is a matter of an instrument of crime, the requested Party shall, at the request of the requesting Party, adopt appropriate precautionary measures to the extent permitted by its domestic legislation.

(3) The request referred to in the preceding paragraph shall include:

- (a) A description of the requested precautionary measure;
- (b) A summary of the facts of the case (with a description of the offence and a statement of when and where it was committed) and a reference to the relevant legal provisions;
- (c) A description of the property in respect of which the precautionary measure is to be applied, a statement of its market value and an indication of the relationship between the property and the person against whom the measure is to be directed;



- (d) An estimate of the amount in respect of which the precautionary measure is to be applied and the basis for the estimate.

*Article XI. Property Confiscation*

The Parties, in accordance with their domestic legislation, may cooperate in taking final measures in respect of property connected with an illicit act committed within the territory of either Party.

*Article XII. Protection of the Rights of Third Parties*

The provisions of this Agreement may not be construed in such a way as to prejudice the rights of bona fide third parties.

*Article XIII. Authentication of Documents and Certificates*

Documents originating within the territory of one Party that are to be submitted within the territory of the other Party and are transmitted through the central authorities shall not require authentication or any similar formality.

*Article XIV. Relationship with other Arrangements and Agreements*

This Agreement shall not affect the rights and obligations arising out of the international bilateral or multilateral agreements or arrangements in force between the Parties.

*Article XV. Settlement of Disputes, Termination and Entry into Force*

(1) Any doubt arising from a request shall be resolved through consultations between the central authorities.

Any dispute that may arise concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by the Parties through diplomatic channels and by the means of conflict resolution established in international law.

(2) This Agreement may be terminated by either Party notifying the other Party through diplomatic channels. Its period of validity shall cease 6 (six) months from the date on which the notification is received. Requests for assistance made during that period shall be dealt with by the requested Party.

(3) This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of receipt of the last diplomatic note in which the Parties inform one another that they have complied with the requirements of their respective constitutional rules.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Santa Fé de Bogotá, on 31 July 1997, in duplicate, in the Spanish language, the two texts being equally valid and authentic.

For the Government of the Republic of Colombia:

MARIA EMMA MEJIA VELEZ  
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Paraguay:

RUBEN MELGAREJO LANZONI  
Minister of Foreign Affairs

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION POUR LA PRÉVENTION, LE CONTRÔLE  
ET LA RÉPRESSION DU BLANCHIMENT DE L'ARGENT  
PROVENANT DE QUELCONQUE ACTIVITÉ ILLICITE ENTRE LE  
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE  
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY

Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Paraguay, ci-après dénommés « les Parties »,

Conscients que le blanchiment de capitaux constitue une activité délictuelle qui, de par ses caractéristiques, a acquis une portée internationale et requiert une coopération entre les États afin de pouvoir la contrecarrer de façon efficace;

Que la nature transnationale de cette activité exige, de la part des États, l'adoption de mesures conjointes visant à son éradication;

Reconnaissant qu'une modalité effective de combattre la délinquance organisée est de la priver des gains économiques tirés de ses activités délictuelles;

Convaincus qu'il est nécessaire de renforcer la coopération mutuelle pour lutter contre le blanchiment de capitaux provenant des activités illicites;

Conformément aux normes et aux principes du droit international et des normes constitutionnelles de chacune des Parties;

Sont convenus de ce qui suit :

*Article premier. Définitions*

Aux fins du présent Accord, les Parties appliquent les définitions suivantes :

1. L'expression « information relative à une transaction » désigne l'information ou les registres consignés par une institution financière, ainsi que les rapports établis par celle-ci, sur toute transaction de fonds en espèces impliquant un montant supérieur à celui établi par l'autorité compétente de chaque Partie.

2. L'expression « institution financière » désigne, pour la République du Paraguay, tout agent, toute succursale ou tout bureau situé sur le territoire national, d'une banque, tout commerçant en monnaie ou bureau de change, entité d'encaissement de chèques, courtier ou opérateur sur titres ou d'autres institutions financières, habilités par la Loi n° 417/73 « Générale de banques et d'entités financières »; Loi n° 489/95 « Organique de la Banque centrale du Paraguay » et leurs réglementations et la Loi n° 94/91 « relative au marché des capitaux ».

Cette expression désigne, pour la République de Colombie, les établissements de crédit (banques, sociétés financières, sociétés d'épargne - logement et sociétés de financement commercial), les sociétés de services financiers, les sociétés de capitalisation et les organismes coopératifs du niveau supérieur de type financier.

Aux fins du présent Accord, les mesures ici prévues seront appliquées aux opérateurs du marché public des valeurs, tels que les bourses, les agents boursiers, les agents indépendants de valeurs, les entités et administrations de fonds d'investissement, les entités d'administration de dépôts centralisés de valeurs, les agences de notation des valeurs, ainsi que les bureaux d'intermédiation dans la vente de devises ou bureaux de change, les coopératives d'épargne et de crédit, les casinos, les agences de jeux et de hasard, les personnes qui réalisent des opérations de commerce extérieur, les entités d'assurance et d'intermédiation en assurance et de réassurance, ainsi que d'autres entités déterminées de concert par les Parties.

3. L'expression « activité illicite » désigne toute activité définie clairement par la législation des Parties comme pouvant faire l'objet d'une sanction pénale.

4. Le terme « bien » désigne un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien.

5. L'expression « produit du délit » désigne tout bien dérivé ou obtenu directement ou indirectement de la commission d'un délit ou l'équivalent de ces biens.

6. Le terme « Mesure définitive » ou « saisie » désigne toute peine ferme ordonnée par un tribunal ou une autorité compétente aboutissant à l'extinction des droits de propriété sur ces biens, produits ou instruments du délit de blanchiment de capitaux.

7. L'expression « Mesures provisoires » ou « embargo, saisie préventive ou confiscation de biens » désigne l'interdiction temporaire de transférer, de convertir, d'aliéner ou de mobiliser des biens ou la garde ou le contrôle temporaire de ces biens, en vertu d'une ordonnance délivrée par une autorité compétente.

## *Article II. Champ d'application*

Les Parties s'engagent à mettre en place un mécanisme de coopération et d'entraide mutuelle pour :

1. Prévenir, contrôler et réprimer le blanchiment de capitaux résultant d'opérations réalisées par les institutions financières visées au point 2, article premier du présent Accord.

2. Prévenir, contrôler et réprimer le blanchiment de capitaux résultant de la commercialisation internationale de biens, de services ou du transfert de technologie.

3. Prévenir, contrôler et réprimer le blanchiment de capitaux résultant du déplacement physique de capitaux, à partir ou vers les frontières territoriales.

## *Article III. Mesures de prévention et de contrôle pour le secteur financier et boursier*

1. Les Parties veillent à ce que les institutions financières relevant de leur législation nationale conservent et communiquent l'information pertinente pour chaque transaction soumise au contrôle et en particulier pour toute transaction suspecte réalisée par un de leurs clients.

2. Les Parties font en sorte que les institutions financières, conformément à leur règlement intérieur, mettent en place des mécanismes permettant de connaître le client et

son activité économique, ainsi que le volume, la fréquence et les caractéristiques de ses transactions financières.

3. Les Parties peuvent envisager la création de réseaux de renseignement financier ayant pour mission de collaborer avec les autorités responsables de l'investigation des opérations de blanchiment de capitaux.

4. Les Parties s'accordent mutuellement l'assistance technique la plus large possible sur les méthodes et les mécanismes les plus efficaces pour prévenir, détecter, contrôler, investiguer et pénaliser les opérations de blanchiment de capitaux réalisées par le biais du secteur financier.

*Article IV. Mesures visant à prévenir et à contrôler la commercialisation internationale de biens, de services et de transfert de technologie*

1. Les Parties adoptent les mesures pertinentes pour garantir que leurs habitants coopèrent avec les autorités, nationales et étrangères, afin de prévenir le blanchiment réalisé par le biais de la commercialisation internationale de biens, de services et de transfert de technologie, à partir de ou vers le territoire de l'une des Parties.

2. Les Parties exercent un contrôle spécial sur les activités de quiconque produit et commercialise ces biens, ces services et ce transfert de technologie susceptibles d'être utilisés pour blanchir des biens ou des capitaux d'origine illicite à partir de ou vers le territoire de l'une des Parties.

3. Les Parties mettent en place les contrôles requis pour garantir que les personnes ou les entreprises qui exportent ou importent des biens, des services et du transfert de technologie à partir de ou vers le territoire de l'une d'entre elles adoptent les mécanismes appropriés pour connaître leurs clients, ainsi que pour empêcher ces derniers d'effectuer des règlements à l'aide d'argent provenant d'activités illicites.

4. Les Parties adoptent les mesures pertinentes pour que les entreprises et les personnes qui exportent ou importent des biens, des services et du transfert de technologie, à partir de ou vers le territoire de l'une des Parties, communiquent au plus tôt aux autorités compétentes des Parties toute information pouvant donner à penser que ces activités sont utilisées aux fins du blanchiment de capitaux.

5. La réserve ou le secret commercial ne peut être opposable qu'en vertu de la législation intérieure de chaque Partie.

6. Les Parties s'accordent mutuellement l'assistance technique la plus large possible sur les méthodes et les mécanismes les plus efficaces pour prévenir, détecter, contrôler, investiguer et pénaliser les opérations de blanchiment de capitaux réalisées par le biais de la commercialisation internationale de biens, de services et de transfert de technologie.

*Article V. Mesures de prévention et de contrôle pour la mobilisation physique des capitaux*

1. Les Parties adoptent les mesures voulues pour contrôler la mobilisation de monnaie en espèces, chèques de voyage, ordres de paiement et autres mécanismes

susceptibles d'être utilisés pour transférer des ressources du territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre.

2. Les contrôles visés par le présent article peuvent être des rapports consignants le mouvement des espèces signalées au point 1 du présent article lorsque la valeur de celles-ci dépasse les montants établis par l'autorité compétente de chacune des Parties, ainsi que la date, le montant, le port ou le point d'entrée, ainsi que le nom et l'identification de la personne ou des personnes effectuant la transaction respective.

3. Les Parties s'accordent mutuellement l'assistance technique la plus large possible sur les méthodes et les mécanismes les plus efficaces pour prévenir, détecter, contrôler, investiguer et pénaliser les opérations de blanchiment de capitaux résultant du mouvement physique de capitaux.

#### *Article VI. Autorités centrales*

1. Chacune des Parties désigne une Autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les réclamations visées par le présent Accord.

2. À cet effet, les Autorités centrales communiquent directement entre elles et transmettent les réclamations à leurs autorités compétentes.

#### *Article VII. Échange d'information*

1. Conformément aux termes du présent Accord, les Parties se prêtent assistance pour faciliter l'échange rapide et confidentiel d'information financière, de change et commerciale afin de détecter et d'effectuer le suivi d'opérations soupçonnées d'être liées au blanchiment.

2. À cette fin, une communication directe sera établie entre les Autorités centrales de chaque État Partie afin d'obtenir et de fournir cette information en vertu de leur législation interne.

3. Lorsque la Partie requérante demande ce type d'entraide dans le cadre d'une enquête judiciaire, les Autorités centrales demanderont aux autorités compétentes de prêter leur coopération afin d'obtenir et de fournir l'information requise.

Les autorités compétentes sont les autorités judiciaires des deux Parties.

#### *Article VIII. Coopération et entraide judiciaire mutuelle*

1. Conformément aux termes du présent Accord, les Parties se prêtent une entraide mutuelle dans l'échange de preuves et la réalisation d'interventions judiciaires pouvant être utilisées dans les enquêtes, les procès et les poursuites pour délit de blanchiment de capitaux. Cette entraide portera notamment sur :

- a) La localisation et l'identification de personnes et de biens ou leurs équivalents;
- b) La notification d'actes judiciaires ;

- c) L'envoi de documents et d'informations relatifs aux transactions financières soumises au contrôle;
  - d) La réalisation de perquisitions de domiciles et d'inspections judiciaires;
  - e) La collecte de témoignages et la réalisation d'expertises;
  - f) L'ordonnance de comparution et le transfert volontaire de personnes en tant que témoins ou experts;
  - g) L'embargo, la saisie, la confiscation de biens;
  - h) Toute autre forme d'entraide, dès lors qu'elle est autorisée par la législation de la Partie requise.
2. La demande d'entraide judiciaire doit être formulée par écrit et doit consigner:
- a) Le nom de l'autorité compétente chargée de l'enquête ou de la procédure judiciaire;
  - b) L'objet de la demande et la description de l'assistance demandée;
  - c) Un résumé succinct de l'affaire sur laquelle porte l'enquête ou la procédure, accompagné du libellé des dispositions légales pertinentes;
  - d) Les détails et la motivation de toute procédure spéciale sollicitée par la Partie requérante;
  - e) Le délai dans lequel la Partie requérante souhaite que la démarche sollicitée soit exécutée.
  - f) Le cas échéant, l'identité, la nationalité, la résidence ou le domicile de la personne qui doit faire l'objet d'une ordonnance de comparution ou d'une notification, si celle-ci est connue, et le rapport existant entre cette personne et l'enquête ou le procès;
  - g) Le cas échéant, l'identité, la nationalité et la résidence ou le domicile de la personne qui est appelée à comparaître pour présenter la charge des preuves, si celle-ci est connue;
  - h) L'information disponible sur les transactions qui font l'objet de la demande d'entraide, entre autres, si cette information est connue, le numéro du compte, le montant, les mouvements et la moyenne du bilan de celui-ci, le nom du titulaire, le nom et l'adresse de l'institution financière qui participe à la transaction et la date à laquelle celle-ci a eu lieu.

3. Les témoins ou les experts, quelle que soit leur nationalité, qui sont convoqués à comparaître auprès des autorités judiciaires de la Partie requérante ne peuvent être ni mis en examen, ni détenus ni soumis à aucune restriction de leur liberté personnelle sur le territoire de cette Partie pour des actes ou des condamnations antérieures à leur sortie du territoire de la Partie requise.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui consent par écrit à comparaître auprès des autorités judiciaires de la Partie requérante afin de répondre pour des faits qui font l'objet d'une procédure engagée à son égard, et qui se présente volontairement, ne peut être ni mis en examen, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de cette Partie pour des actes ou des condamnations

antérieurs à sa sortie du territoire de la Partie requise autres que ceux stipulés dans l'ordonnance de comparution.

La garantie visée dans le présent article cesse d'être en vigueur lorsque le témoin ou la personne devant comparaître, après avoir eu la possibilité d'abandonner le territoire de la Partie requérante pendant quinze (15) jours consécutifs après que sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires, reste sur le territoire en question ou y retourne après l'avoir quitté.

4. En cas d'urgence et si la législation de la Partie requise l'autorise, la demande d'entraide peut être envoyée par télécopie, télex ou tout autre moyen équivalent, l'original devant être envoyé dans les trente (30) jours.

5. L'entraide sera accordée même si le fait pour lequel la Partie requérante engage la procédure n'est pas considéré comme délit de blanchiment de capitaux selon la loi de la Partie requise.

Néanmoins, aux fins des inspections judiciaires, des réquisitions, des registres et des mesures conservatoires, l'assistance ne sera prêtée que si le fait pour lequel la Partie requérante engage la procédure est considéré comme délit de blanchiment de capitaux par la législation de la Partie requise.

6. L'autorité compétente de la Partie requise peut surseoir à l'exécution d'une requête d'assistance judiciaire ou la conditionner si elle estime que celle-ci entrave une enquête ou une procédure judiciaire en cours dans l'État en question.

7. La Partie requise peut rejeter la demande d'assistance judiciaire si elle estime que celle-ci est contraire à son ordre juridique, entrave une démarche ou une procédure pénale en cours ou qu'elle porte atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sécurité nationale ou aux intérêts publics de cette même Partie. Ce refus doit être communiqué à la Partie requérante moyennant une note écrite en expliquant le bien-fondé.

8. La Partie requérante ne peut utiliser les preuves ou les informations obtenues grâce à l'assistance prêtée pour aucune autre fin que celle stipulée dans la demande d'assistance.

9. Les frais encourus pour exécuter une demande d'assistance sont à la charge de la Partie requise, à moins que les Parties n'en décident autrement. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires à cette fin, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles cette demande sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

#### *Article IX. Réserve bancaire*

1. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de prêter l'entraide judiciaire mutuelle visée par le présent Accord.

2. Les Parties s'engagent à ne pas utiliser les informations confidentielles obtenues sous le couvert du secret bancaire en vertu du présent Accord à d'autres fins que celles prévues dans la demande d'assistance.



*Article X. Mesures conservatoires sur les biens*

1. L'autorité compétente d'une Partie peut, par l'intermédiaire des Autorités centrales, demander l'identification et/ou l'adoption de mesures conservatoires sur les biens, l'instrument ou le produit d'un délit, situés sur le territoire de l'autre Partie.

S'agissant de l'identification du produit du délit, la Partie requise se doit de communiquer le résultat de la recherche.

2. Lorsque le produit du délit a été identifié ou s'agissant de l'instrument du délit, la Partie requise peut, à la requête de la Partie requérante, adopter les mesures conservatoires correspondant à ces biens, pour autant que sa législation interne l'y autorise.

3. Une requête présentée conformément à l'alinéa précédent doit inclure:

- a) Une copie de la mesure conservatoire;
- b) Une relation des faits, y compris une description de l'acte délictueux, où et comment il a été commis et une référence aux dispositions légales pertinentes;
- c) Une description des biens sur lesquels doit porter la mesure provisoire sollicitée, ainsi que leur valeur commerciale et leur rapport avec la personne contre laquelle l'action a été engagée;
- d) Une estimation de la somme sur laquelle va porter la mesure provisoire sollicitée et les antécédents ayant servi au calcul de ce montant.

*Article XI. Mesure de saisie des biens*

Les Parties peuvent, conformément à leur législation interne, s'entraider dans l'application de mesures définitives sur des biens associés à la commission d'un acte illicite dans l'une et l'autre Partie.

*Article XII. Protection des droits de tiers*

Les dispositions contenues dans le présent Accord ne peuvent être interprétées au détriment de tiers de bonne foi.

*Article XIII. Légalisation de documents et de certificats*

Les documents provenant d'une des Parties qui doivent être présentés sur le territoire de l'autre Partie par le truchement des Autorités centrales sont dispensés de toute légalisation ou formalité analogue.

*Article XIV. Rapport avec d'autres traités et accords*

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des différents accords et conventions bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre les Parties.

*Article XV. Règlement des différends, dénonciation et entrée en vigueur*

1. Tout doute pouvant surgir à propos d'une demande sera éclairci moyennant des consultations entre les Autorités centrales.

Tout différend pouvant survenir à propos de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé par voie diplomatique et par les mécanismes de règlement établis dans le droit international.

2. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie, moyennant l'envoi d'une communication écrite à l'autre Partie par voie diplomatique. L'Accord cesse d'être en vigueur dans un délai de six (6) mois à partir de la date de réception de cette notification. Les demandes d'entraide réalisées dans ce délai seront exécutées par la Partie requise.

3. Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière note diplomatique dans laquelle chacune des Parties informe l'autre Partie que les procédures requises par leurs dispositions constitutionnelles respectives ont été accomplies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Santa Fe de Bogota, le trente-et-un (31) juillet mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en deux exemplaires en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Colombie :

MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ  
Ministre des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :

RUBÉN MELGAREJO LANZONI  
Ministre des Affaires étrangères